COLOMBIA

Perspectivas para septiembre-febrero



Análisis de riesgo - septiembre de 2020

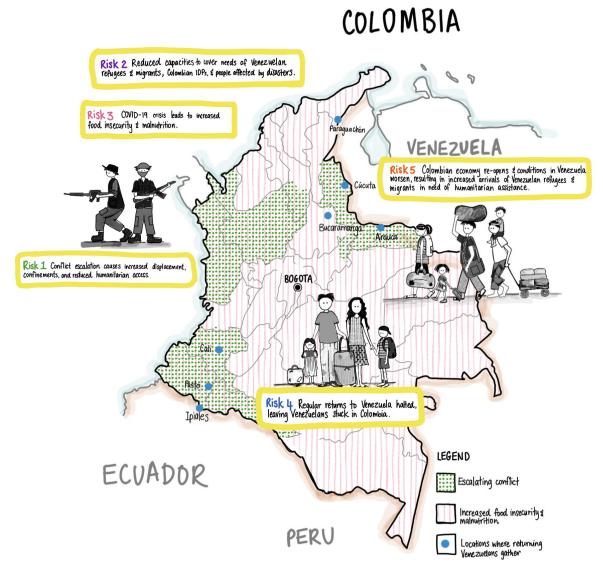
En Colombia, la crisis de la COVID-19 se produce en un contexto complejo donde las necesidades humanitarias están impulsadas por el conflicto armado interno y la crisis de migración y de refugiados.

Este reporte de riesgo busca informar a los tomadores de decisiones humanitarias y facilitar la planificación de la respuesta a través de un análisis de lo siguiente:

- Posible evolución de la dinámica de la crisis en Colombia durante los próximos seis meses de 2020 y principios 2021
- Factores que probablemente provocarán cambios en la situación
- Necesidades humanitarias que pueden surgir si se aparecen los riesgos.

Índice de contenidos

Resumen de la situación	3
Riesgo 1	5
Riesgo 2	7
Riesgo 3	8
Riesgo 4	10
Riesgo 5	15
Factores agravantes	16



Vea el mapa completo en la página 16

Riesgo 1 La escalada del conflicto provoca un aumento de los desplazamientos, los confinamientos y la reducción del acceso humanitario



El conflicto armado ha continuado a pesar de la crisis de la COVID-19, con grupos armados que utilizan cada vez más las medidas del gobierno nacional para ejercer control social sobre la población civil en las zonas donde están presentes. Existe el riesgo de una escalada del conflicto armado, ya que los grupos armados aprovechan las medidas de contención y la sobrecarga de las fuerzas de seguridad del Estado para consolidar el control de las zonas en disputa. Esto probablemente conduciría a un aumento de los desplazamientos, los confinamientos, los reclutamientos forzosos y las amenazas contra los líderes sociales. Es probable que los enfrentamientos afecten negativamente al acceso humanitario en las zonas afectadas.

Riesgo 2 Las capacidades para cubrir las necesidades humanitarias entre refugiados y migrantes venezolanos, desplazados internos colombianos y personas afectadas por desastres naturales son reducidas



Very low Moderate Major Negligible Medium Very high Como ocurre con la mayoría de los países afectados por crisis humanitarias, es probable que se produzcan déficits de financiación en Colombia en 2020 y 2021. Los principales donantes, incluidos Estados Unidos y países europeos, se han visto afectados significativamente por la COVID-19. Es probable que se reduzca la financiación humanitaria a Colombia, lo que conduciría a una reducción de la capacidad de respuesta humanitaria a las personas necesitadas.

Riesgo 3 La crisis de la COVID-19 conduce a una mayor inseguridad alimentaria y desnutrición



Las medidas nacionales de contención para reducir la transmisión de la COVID-19, incluidos los cierres y las restricciones de movimiento, están afectando gravemente las oportunidades de subsistencia, especialmente en el sector informal. Las personas

vulnerables que han perdido ingresos corren el riesgo de sufrir una mayor inseguridad alimentaria y malnutrición, ya que se agotan los activos y se reduce el poder adquisitivo de los hogares. Es probable que los aumentos de precios y las interrupciones de la cadena de suministro contribuyan aún más a disminuir el acceso a los alimentos y la diversidad dietética.

Riesgo 4 Las autoridades venezolanas frenan las retornos a Venezuela, lo que deja a los venezolanos con intenciones de volver a su país atrapados en Colombia, sin capacidad de cumplir sus necesidades básicas



Las medidas de contención y los brotes de COVID-19 en países de la región han provocado movimientos de retorno de refugiados y migrantes venezolanos a su país de origen. Actualmente, el gobierno venezolano permite que solo una pequeña cantidad de venezolanos regrese cada semana, a través de los pasos fronterizos oficiales en Cúcuta y Arauca. El aumento de las restricciones en los cruces fronterizos, o incluso la suspensión total de los retornos, corre el riesgo de abrumar la capacidad de los departamentos fronterizos colombianos para satisfacer las necesidades de quienes esperan regresar, lo que lleva a un aumento de personas que cruzan de manera irregular.

Riesgo 5 La economía colombiana se reabre y las condiciones en Venezuela empeoran, lo que resulta en un aumento de las llegadas de refugiados y migrantes venezolanos que necesitan asistencia humanitaria



Si bien es probable que los movimientos de retorno de Colombia a Venezuela continúen en los próximos meses, es probable que una mejora de la situación en Colombia, particularmente relacionada con la economía y el levantamiento de las restricciones laborales junto con un empeoramiento de la situación en Venezuela, desencadene movimientos inversos y los venezolanos recién llegados a Colombia y los que están por llegar probablemente sean cada vez más vulnerables y necesiten asistencia humanitaria.

Metodología

El análisis de riesgos es el proceso de identificar y analizar posibles eventos futuros que pueden afectar negativamente a las personas, los activos o el medio ambiente. El análisis de riesgos no es un pronóstico y no tiene como objetivo predecir el futuro inmediato, sino que tiene como objetivo identificar futuros posibles con consecuencias humanitarias negativas significativas.

El análisis de riesgos de ACAPS tiene como objetivo ayudar a los responsables de la toma de decisiones humanitarias a comprender los posibles cambios futuros en el contexto y su impacto humanitario. Al exponer los probables desarrollos futuros y comprender su impacto, pueden incluirse en la planificación y preparación de la respuesta. La base metodológica de este análisis de riesgos se describe en la nota de metodología de riesgos de ACAPS(encuentre más información sobre la metodología de riesgo de ACAPS). Se basa en una revisión de datos secundarios (SDR, por sus siglas en inglés) y se complementa con entrevistas a expertos.

El análisis de riesgos no es una ciencia exacta. Un suceso identificado por un analista como un peligro puede ser identificado por otro como un desencadenante de un suceso diferente que el segundo analista considera como el peligro. El análisis de riesgos depende de una sólida comprensión del contexto y de la investigación de la interacción de las variables que provocan o resisten el cambio.

El riesgo es función de la gravedad y la probabilidad. El riesgo que plantea un suceso potencial aumenta a medida que aumenta la gravedad esperada del evento o la probabilidad de que ocurra. La probabilidad de un riesgo no necesita ser alta para que sea motivo de preocupación.

Cada riesgo en este informe se presenta con una justificación lógica que explica el riesgo y su contexto. Los desencadenantes identificados son una serie de factores y sucesos que pueden contribuir a la materialización del riesgo. La sección de impacto describe las probables consecuencias humanitarias de cada riesgo.

Limitaciones

La crisis de la COVID-19 es muy dinámica y la situación puede cambiar rápidamente, lo que puede afectar la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos presentados en este reporte.

Hay falta de información relacionada a los cruces fronterizos informales entre Ecuador y Colombia y entre Colombia y Venezuela.

Agradecimientos

ACAPS agradece el amable apoyo de Cash Working Group, CDC, CCD, Coalición por Venezuela, GIFMM, iMMAP, MMC, OCHA, REACH y VZAT en la investigación y revisión de este reporte.

Todo el análisis en este informe es responsabilidad exclusiva de ACAPS y no refleja necesariamente la posición de las organizaciones citadas.

Resumen de la situación

En Colombia, el primer caso de COVID-19 se informó el 6 de marzo de 2020. El 7 de septiembre, se han informado 666,500 casos de COVID-19. Bogotá, la capital, es la zona más afectada con 226,000 casos.

Desde el comienzo del brote, el gobierno colombiano ha implementado una serie de medidas de contención, que incluyen el cierre de las fronteras, escuelas y un confinamiento nacional. Desde el 1 de septiembre de 2020, se han levantado muchas medidas y los municipios han seguido diversos grados de restricciones. El gobierno también utiliza medidas de protección social para mediar en el impacto socioeconómico del confinamiento, como por ejemplo transferencias de efectivo a hogares pobres como parte del programa "Ingreso Solidario". Además, el gobierno ha estado fortaleciendo las capacidades del sistema de salud pública en el país, por ejemplo, importando pruebas y ventiladores(Gobierno de Colombia 28/05/2020; 03/04/2020; 07/04/2020).

Las medidas de contención han tenido un impacto significativo en la economía y en los medios de vida. Diferentes estimaciones proyectan que la economía se contraerá hasta un 10 % durante 2020(Reuters 31/07/2020; Banco Mundial 06/2020; El País 26/06/2020). La tasa de desempleo subió al 19.8 % en junio, frente al 12.6 % en marzo (DANE06/2020).

Los trabajadores informales que trabajan sin contrato, como los jornaleros y los vendedores ambulantes, se han visto particularmente afectados por la pérdida de sus medios de vida. Estos trabajadores representan una gran proporción de la población económicamente activa, con un 48 % de la población activa en 23 ciudades importantes y áreas urbanas de Colombia trabajando informalmente (DANE 13/04/2020). Los refugiados y migrantes venezolanos se vieron afectados ya que hasta el 71 % de ellos habían estado trabajando de manera informal(WPF 19/02/2020). La dependencia de un ingreso diario inhibe la capacidad de las personas para cumplir con la cuarentena nacional(France24 07/06/2020;OCHA 07/2020). Más de 95,000 refugiados y migrantes venezolanos en Colombia y la región han regresado a Venezuela después de perder sus ingresos y alojamiento (Gobierno de Colombia 06/08/2020;El Espectador 04/04/2020). Además, el

confinamiento ha provocado aumentos de precios y escasez de productos básicos en algunas zonas de Colombia, debido a la mayor demanda de ciertos productos y la interrupción de las líneas de producción y transporte (REACH 30/06/2020; FAO 23/04/2020).

Las operaciones humanitarias también se han visto afectadas. Aunque el gobierno nacional permite el movimiento de participantes humanitarios, muchos programas han sido suspendidos o adaptados para proteger la salud y seguridad tanto del personal como de la población afectada. Muchos programas presenciales han sido reemplazados por asistencia virtual o telefónica, y muchos programas de asistencia en especie han sido reemplazados por transferencias de efectivo (GIFMM 24/03/2020 ,02/04/2020). A julio de 2020, se estima que 10.4 millones de personas, incluidos los grupos de población vulnerables, como los desplazados internos que dependen de la ayuda, así como los refugiados y los migrantes necesitan ayuda en relación con la crisis del COVID-19 en Colombia (OCHA 07/2020).

La crisis de la COVID-19 en Colombia está ocurriendo en el contexto del conflicto armado interno que está afectando diferentes regiones del país con diversas dinámicas y niveles de intensidad de conflicto. Desde de la firma del acuerdo de paz en 2016 y la posterior desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el conflicto entre diferentes grupos armados por el control de zonas lucrativas y estratégicas (valiosas para el cultivo de coca, producción y transporte de droga y la explotación de recursos naturales) se ha intensificado a medida que estos grupos se esfuerzan por consequir el control de zonas previamente controladas por las FARC-EP. Los grupos armados clave involucrados en el conflicto incluyen grupos disidentes diferentes a las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL, también conocido como Los Pelusos), el grupo de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también conocido como el Clan del Golfo), y el grupo disidente AGC Los Caparros. El conflicto ha causado el desplazamiento y el confinamiento de comunidades y violaciones a los derechos humanos como los homicidios de líderes sociales. Desde el inicio de las medidas nacionales de contención, los grupos armados han usado el confinamiento para imponer sus propias reglas para la cuarentena en zonas donde tienen una fuerte presencia y control. Además, desde julio de 2020, las zonas afectadas por el conflicto han visto una oleada de masacres en el contexto de los grupos armados ejerciendo el control sobre la población civil y expandiendo o consolidando dicho control sobre los territorios, sin embargo, sus dinámicas varían entre regiones (Verdad Abierta 17/08/2020).

Colombia alberga el mayor número de refugiados e inmigrantes venezolanos que dejaron su país de origen debido a la crisis humanitaria en Venezuela. Al 31 de mayo de 2020, Colombia había acogido alrededor de 1,76 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos. Esta cifra representa una disminución del 3,3 % desde febrero de 2020

(antes del comienzo de la pandemia), debido a que 95,000 refugiados e inmigrantes venezolanos salieron de Colombia (Gobierno de Colombia 06/08/2020). La mayoría de refugiados e inmigrantes venezolanos tienen acceso limitado a la seguridad social. A pesar de que alrededor de 763,000 venezolanos tienen un estatus migratorio legal, 1 millón de ellos no lo tienen y la falta de documentos y de tal estatus, limita su acceso a la seguridad social, al trabajo formal y a otros derechos y servicios. El acceso a un estatus migratorio legal se dificulta a menudo, por los requisitos para la documentación(DeJusticia 04/2019).

El aumento del conflicto ocasiona un incremento del desplazamiento, de los confinamientos y una reducción al acceso humanitario



Razonamiento

Pese a una leve reducción en la intensidad del conflicto en marzo y abril del 2020, los datos disponibles muestran que el conflicto armado continúa a pesar de las restricciones de movilidad relacionadas a la COVID-19. Existe el riesgo de que el conflicto armado se intensifique en las regiones más afectadas, ya que los grupos armados aprovechan las medidas de contención y las fuerzas de seguridad estatales sobrecargadas para consolidar su control sobre las zonas en disputa. Esto probablemente ocasione un aumento de los desplazamientos y de las amenazas y muertes de líderes sociales. El acceso humanitario se vería afectado, mientras el confinamiento le impide a las personas acceder a la ayuda; así mismo, una mayor inseguridad afectaría la capacidad de las organizaciones humanitarias para responder a necesidades de naturaleza humanitaria.

Dinámicas del conflicto

Diversos grupos armados se encuentran en disputa por el control territorial y las rutas estratégicamente importantes para las economías ilícitas. Ese conflicto se ha intensificado a medida que luchan (aunque no exclusivamente) por áreas anteriormente controladas por las FARC-EP. Las alianzas y las dinámicas del conflicto varían entre los departamentos y los municipios afectados. Los grupos armados se disputan por zonas lucrativas para la extracción de recursos naturales como el oro y la coca, el tráfico de drogas y el control de las poblaciones que viven en esas zonas. Las siguientes regiones están identificadas como zonas de preocupación por el incremento del conflicto:

• La costa pacífica: en el departamento del **Chocó**, los grupos disidentes ELN, AGC y las FARC-EP, se disputan los territorios lucrativos y las economías irregulares. El ELN también se está expandiendo a zonas bajo el control de otros grupos armados como la AGC (InSight Crime 16/01/2020; Crisis Group 08/08/2019). Así mismo, el ELN y las FARC-EP también luchan por las rutas de tráfico de drogas en el departamento del

- Cauca. En el departamento de Nariño, el conflicto se caracteriza por enfrentamientos entre diferentes grupos armados, incluyendo diferentes divisiones de disidentes de las FARC-EP (FIP 24/05/2020; OCHA 27/08/2020; Verdad Abierta 08/04/2020).
- Algunas partes del departamento de Antioquía y la región del Bajo Cauca, se presentan enfrentamientos entre los grupos disidentes ELN, AGC, FARC-EP y Los Caparros.
- Norte de Santander: en la región del Catatumbo, los enfrentamientos territoriales las dominan el ELN, EPL y las FARC-EP. A lo largo de la frontera con Venezuela, Los Rastrojos y el ELN luchan por el control de las economías ilícitas y las rutas de contrabando (InSight Crime 30/03/2020; FIP 24/05/2020; Verdad Abierta 27/07/2020, 01/08/2020; HIIK 03/2020).
- El departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador: grupos disidentes diferentes a las FARC-EP se disputan el control territorial y las rutas lucrativas del tráfico de drogas (FIP 24/05/2020).
- El ELN también ha expandido su área de influencia, por ejemplo, al norte de Boyacá y al sur de Bolívar (Semana 13/05/2020; FIP 24/05/2020). El departamento de Arauca, donde el ELN es generalmente el actor dominante, ha visto un fortalecimiento de los grupos disidentes de las FARC-EP (LaFM 21/08/2020).

Los datos sobre los eventos de conflicto muestran generalmente que, si bien, la intensidad del conflicto disminuyó durante la segunda mitad del 2019, los niveles de conflicto aumentaron de nuevo durante el 2020. Se observó una disminución durante marzo y abril, probablemente relacionado, en parte, al cese al fuego unilateral del ELN, pero la intensidad del conflicto aumentó de nuevo en mayo(OCHA 05/08/2020).

El conflicto ha afectado significativamente a la población civil, especialmente el conflicto relacionado al control territorial entre grupos armados. Entre enero y julio de 2020, más de 18,600 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos ¹, similares al segundo período en 2019. Un 71 % de personas fueron desplazadas en los departamentos a lo largo de la costa Pacífica. Más de la mitad de los desplazamientos fueron resultado de enfrentamientos entre los grupos armados (OCHA 24/08/2020).

El número de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y sus familiares, así como combatientes desmovilizados de las FARC-EP, han aumentado desde inicios del 2020, aunque continúan siendo numerosas: 43 asesinatos se registraron en enero, y 28 en agosto (INDEPAZ 08/2020).

¹ El desplazamiento masivo es definido como el desplazamiento de al menos 10 jefes de familia o 50 personas durante un solo evento (Unidad de Víctimas). Los desplazamientos individuales de menos de 50 personas o 10 jefes de familia se registran por separado y no se incluyen en esta cifra.

El 2020 ha visto también un inminente aumento de masacres². Las masacres se han perpetrado en distintos contextos regionales, por motivos que incluyen el ejercicio del control territorial o el control sobre la población civil por parte de grupos armados (El Espectador 22/08/2020; Verdad Abierta 17/08/2020). El comité de asesoramiento de la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES) de Colombia cuenta 42 masacres, con un total de 182 víctimas entre el primero de enero y el 24 de agosto, siendo Antioquia y los departamentos de la costa Pacífica los más afectados (CODHES 24/08/2020).

Los grupos armados y la COVID-19

Desde el inicio de las medidas nacionales de contención frente a la COVID-19, los grupos armados han estado usando la crisis para consolidar su influencia y control social sobre la población en zonas donde tienen mayor presencia (UNVMC 26/06/2020). Tales grupos han impuesto toques de gueda y cuarentenas; los civiles que no sigan estas reglas corren el riesgo de ser señalados como opositores. Panfletos de varios grupos armados circulan en departamentos como Nariño, Cauca y Valle del Cauca, amenazando a quienes no cumplan con las normas de confinamiento (Semana 13/05/2020; HRW 15/07/2020). Algunos establecen reglas adicionales, como la regulación de precios y negocios o la imposición de restricciones adicionales de movilización, como no permitir que las personas salgan de sus hogares durante los toques de gueda, incluso ante emergencias médicas u otras necesidades importantes (Semana 13/05/2020; HRW 15/07/2020). Se han registrado otras represalias y ataques a civiles en relación a la cuarentena. Human Rights Watch ha documentado nueve de esos asesinatos para mediados de julio, mientras la Universidad de los Andes registró 30 homicidios relacionados con la cuarentena para mediados de agosto (HRW 15/07/2020; Uni Andes 20/08/2020). Las amenazas de muerte dirigidas a las personas con COVID-19 han circulado en el departamento de Putumayo como manifestación por parte de los grupos armados de intentar ejercer un control social(OCHA 17/06/2020). Estos grupos también han señalado a interlocutores humanitarios: desde mediados de marzo se han registrado al menos 17 ataques contra misiones médicas(OCHA 05/08/2020).

La capacidad de las fuerzas de seguridad del estado para responder al aumento del conflicto probablemente se ha reducido por la crisis de la COVID-19. A medida que las fuerzas de seguridad se despliegan para hacer cumplir la cuarentena nacional y aumentar el control en las fronteras, se reducen sus medios para responder a un incremento del conflicto armado. (FIP 2020)

Factores desencadenantes

- La extensión del confinamiento y otras medidas de contención impuestas por el gobierno, tales como las restricciones de movilidad y un estado prolongado de emergencia en partes de Colombia debido al brote de la COVID-19.
- La ya frágil presencia institucional del gobierno en las regiones afectadas por el conflicto se debilita cada vez más con las continuas medidas de contención, incluyendo las medidas de movilidad, así mismo, el servicio prestado (actualmente bajo) se deteriora aún más.
- La reducida capacidad financiera para implementar los componentes del Acuerdo de Paz relacionados a la reducción de la violencia y la desigualdad.
- La expansión y el apoyo al ELN por parte de interlocutores en Venezuela que permiten fortalecer dicho grupo a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela.

- El desplazamiento interno en aumento debido al incremento de la acción entre grupos armados y/o dirigidos contra civiles, además de la violación a derechos humanos.
- En las zonas afectadas por el conflicto, los grupos armados señalan a los líderes sociales, a los defensores de los derechos humanos y a sus familias, así como a los combatientes desmovilizados de las FARC-EP como opositores; también lo hacen para consolidar el control social, especialmente en zonas de disputa por diferentes grupos armados. Con una escalada del conflicto armado, es probable que aumenten las amenazas en contra de los líderes sociales y comunitarios. Debido a las restricciones a la circulación por la COVID-19, los líderes sociales probablemente se convertirían en blancos de ataques en sus propias casas (FIP 2020). Probablemente aumentarían las masacres.
- Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas probablemente se verían afectados, dado su ubicación en zonas impactadas por el conflicto armado.
- A medida que se fortalecen los grupos armados, un incremento en el reclutamiento forzado es probable, se limita el acceso al apoyo y la protección, y la penuria económica debido a la crisis de la COVID-19 puede incrementar la vulnerabilidad de los hogares. En los primeros meses de 2020, ya se registró un incremento en los casos reportados del reclutamiento de menores (InSight Crime 22/06/2020). El aumento del reclutamiento forzado es más probable si las escuelas permanecen cerradas(InSight Crime 28/08/2020; El Espectador 17/05/2020).

² Las distintas fuentes utilizan definiciones distintas para "masacre" lo que lleva a cifras diferentes. (DW 24/08/2020)

- Los refugiados y migrantes venezolanos son más vulnerables al reclutamiento forzado (FLM 17/07/2020), dado su vulnerabilidad económica. Muchos refugiados y migrantes venezolanos carecen de conocimiento acerca de las dinámicas del conflicto armado en Colombia, lo cual los hace blancos más fáciles para el reclutamiento.
- Efecto perjudicial sobre el acceso humanitario. El confinamiento de comunidades afectadas es probable, restringiendo su acceso a la asistencia humanitaria, ya que enfrentamientos entre grupos armados impiden su circulación. Es probable que la violencia y la inseguridad reduzcan el acceso humanitario a las comunidades afectadas, sumándose a las restricciones que ya han tenido que enfrentar bajo los protocolos nacionales de la COVID-19. Es probable que las restricciones al acceso afecten las cadenas de suministro de alimentos, contribuyendo a un aumento en la inseguridad alimentaria.

Las capacidades para cubrir las necesidades humanitarias entre refugiados y migrantes venezolanos, desplazados internos colombianos y personas afectadas por desastres naturales son reducidas



Razonamiento

Hay un riesgo de que los déficit de financiación lleven a una disminución de las capacidades de los agentes comunitarios para responder a las necesidades de la gente afectada por crisis en Colombia, y un incremento en las necesidades insatisfechas.

Son probables los déficit de financiamiento en 2020, dado que los principales países donantes, incluidos los Estados Unidos (EE. UU.), se han visto afectados por los brotes de COVID-19 de forma significativa. Los Estados Unidos son el principal país donante de Colombia, responsable por el 61 % de todos los fondos destinados a Colombia en 2019, seguido por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), con 7 %. La asistencia bilateral de trece países europeos, junto con la de Canadá, equivale al 18 % de la financiación total para Colombia (OCHA FTS). La contracción actual de las economías de muchos de los países donantes significa que se espera una reducción de la financiación humanitaria. Los niveles bajos de financiación de los planes de respuesta para Colombia ya indican que muchas de las actividades previstas no recibirán financiamiento. (OCHA FTS).

Debido a la crisis de COVID-19, se está contrayendo la economía colombiana, con estimaciones que indican una reducción de hasta el 10 % del PIB en 2020(Reuters 31/07/2020). Es probable que esto reduzca la capacidad del gobierno para financiar la asistencia humanitaria, lo cual afecta en particular al apoyo ofrecido a la gente afectada por el conflicto armado y los desastres naturales. En junio de 2020, el gobierno colombiano aseguró que la financiación para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, y el apoyo a las víctimas del conflicto no se recortaría (Reuters 19/06/2020).

Factores desencadenantes

- Recesión económica en los países donantes
- El impacto de los segundos brotes de COVID-19 en los países donantes habituales
- El recorte en el gasto público de los países donantes en las zonas de la asistencia humanitaria y la ayuda para el desarrollo
- Recesión económica en Colombia, reducción del PIB

- La capacidad de las organizaciones humanitarias para cubrir las necesidades humanitarias en el país se reduce de forma significativa. Esto llevaría a una reducción en la asistencia humanitaria para los refugiados y migrantes venezolanos en diversos sectores, y una reducción significativa en la asistencia humanitaria para la gente afectada por los desastres naturales y el conflicto armado interno, incluidos los desplazados internos.
- La capacidad reducida del gobierno, debido al impacto económico de la COVID-19, afectará el gasto público en los asuntos humanitarios.
- Un incremento en las necesidades humanitarias insatisfechas, debido a la falta de financiación.
- Es probable que la financiación disponible para crisis en Colombia se destine mayormente a programas relacionados con la COVID-19. Las demás emergencias y necesidades humanitarias, incluido el desplazamiento debido al conflicto armado, recibirán menos financiación.
- Según el FTS, a medida que se reduce la financiación, es más probable que surjan necesidades en los sectores que actualmente reciben la menor cantidad de financiación, educación, recuperación temprana, refugio y WASH (agua, saneamiento e higiene).
- Es probable que una reducción en la capacidad de respuesta humanitaria haga que la gente necesitada dependa más de fuentes alternativas de asistencia, tales como el apoyo comunitario. Sin acceso a fuentes alternativas de apoyo, los hogares más vulnerables, que anteriormente dependían de la asistencia humanitaria, probablemente recurrían a mecanismos de supervivencia negativos.
- Una mayor competencia por los recursos entre diferentes grupos poblacionales probablemente llevará a un aumento de la xenofobia, especialmente si hay una percepción de que los refugiados y migrantes venezolanos reciben apoyo preferencial.

La crisis de la COVID-19 lleva a un mayor nivel de inseguridad alimentaria y desnutrición



Razonamiento

Las medidas nacionales de contención, destinadas a reducir la transmisión de COVID-19, incluidos el confinamiento y las restricciones de circulación, han impactado gravemente a las oportunidades de subsistencia, sobre todo en el sector informal. Los grupos poblacionales vulnerables, quienes han perdido oportunidades de ingreso, corren un riesgo alto de experimentar la inseguridad alimentaria y la desnutrición durante los próximos meses, a medida que los bienes domésticos se van escaseando y disminuye el poder adquisitivo de los hogares. Es probable que el aumento de precios y las disrupciones en las cadenas de suministro contribuyan aún más a la disminución del acceso a la comida y la diversidad alimentaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que es probable que el número total de personas en Colombia que experimentan la inseguridad alimentaria moderada o severa en 2020 aumente de 3,4 a 7 millones, debido a la crisis de la COVID-19 $(OCHA 07/2020).2F^3$

Con el programa Ingreso Solidario, el gobierno colombiano presta asistencia en efectivo a los hogares vulnerables. Sin embargo, algunos grupos poblacionales no tienen acceso a este programa. Por ejemplo, los hogares venezolanos con una situación jurídica irregular (Proyecto Migración Venezuela 23/05/2020).

Como resultado de la crisis de la COVID-19, y la contracción de la economía colombiana, es probable que muchos hogares de bajos ingresos caigan en la pobreza, aunque las estimaciones varían. Los datos gubernamentales de 2019 mostraron que la incidencia de la pobreza multidimensional ⁴ al nivel nacional fue de 17,5 %, y 34,5 % entre las poblaciones rurales (DANE 2019). Un análisis de la Universidad de los Andes desde el inicio de la COVID estima que la pobreza monetaria aumentará en un 15 % (Uni

3 Nótese que estos estimados se encuentran actualmente en revisión y se esperan incrementos.

Andes 27/05/2020). El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la pobreza aumentará en un 4 % (IADB 06/2020).

Medios de subsistencia

El acceso limitado a los medios de subsistencia reduce el acceso a la comida. Diversas fuentes de información indican una pérdida de medios de subsistencia. La tasa de desempleo nacional, que abarca la pérdida de empleo formal, aumentó de 12,2 % en febrero de 2020, a 19,8 % en junio de 2020 (DANE 06/2020). Los trabajadores informales, tales como los trabajadores jornaleros y los vendedores ambulantes, han sido gravemente afectados por las medidas de contención, ya que los confinamientos limitaron las actividades económicas. En Colombia, el 48 % de la población económicamente activa en 23 ciudades y zonas urbanas grandes tienen un empleo informal (DANE 13/04/2020).

En una evaluación representativa realizada por REACH en junio de 2020 en 12 departamentos, el 89 % de los entrevistados, todos recipientes de la asistencia en efectivo indicaron que sus niveles de ingreso habían disminuido debido a la crisis. Esto se debe principalmente a la disminución de las oportunidades de generación de ingresos, y el haber sido despedidos de sus trabajos anteriores (REACH 30/06/2020).

Ha habido una reducción significativa de las oportunidades de generación de ingresos entre los hogares de refugiados y migrantes venezolanos desde la crisis. En una encuesta representativa de los hogares de refugiados y migrantes venezolanos en mayo de 2020, el 58 % informaron tener una oportunidad de trabajo en el momento en que se realizó la encuesta, mientras que el 89 % afirmaron que llevaba desde antes de la cuarentena nacional trabajando (GIFMM 17/07/2020).

Seguridad Alimentaria

Mientras que la pérdida del poder adquisitivo probablemente será el principal impulsor de la inseguridad alimentaria y la desnutrición, las disrupciones en las cadenas de suministro contribuirán a reducir el acceso a una variedad de alimentos, especialmente en las zonas remotas que han tenido problemas de transporte persistentes. Además, el cierre de las escuelas afecta a la seguridad alimentaria de los niños que dependen las comidas escolares.

Se ha informado de la disrupción de las cadenas de suministro durante la cuarentena nacional. Aunque es probable que los comerciantes intenten adaptarse a la disrupción y, a partir del primero de septiembre de 2020, se han levantado muchas medidas, la reanudación de medidas de contención más estrictas probablemente llevará a nuevas

⁴ El índice combina varios indicadores, incluyendo: actividades laborales, acceso a servicio de salud y condiciones de vida.

disrupciones. En abril, la falta de disponibilidad de productos y la falta de transporte figuraban entre las causas principales del desabastecimiento de productos reportado por comerciantes en 20 departamentos (FAO 23/04/2020). De los 73 comerciantes entrevistados por REACH, en 15 departamentos en junio de 2020, 47 % reportaron desabastecimiento de inventarios. En el ámbito de los alimentos, la escasez que más se reportó fue la del arroz y los frijoles, mientras que la escasez más reportada entre los artículos no alimentarios fue la de los artículos de higiene y limpieza, tales como el alcohol y el gel antibacterial (REACH 30/06/2020). Los tiempos más largos de envío, el transporte intermunicipal más lento, y la falta de transportistas fueron las razones que con más frecuencia se reportaron para las dificultades en la reposición de existencias (REACH 30/06/2020).

Se reportan aumentos de precios vinculados a la crisis de la COVID-19. El 84 % de los consumidores encuestados reportaron aumentos de precios durante el mes anterior a la recopilación de datos, especialmente para alimentos básicos como las papas y el arroz, y para los productos de limpieza/higiene como el blanqueador y el jabón. (REACH 30/06/2020). Entre los 73 comerciantes entrevistados por REACH, el 45% esperan que los precios aumenten durante la medidas de contención de la COVID-19, mientras que el 34 % no esperan ningún cambio en los precios (REACH 30/06/2020). Un análisis adicional de los resultados obtenidos de la encuesta hecha por REACH 2020 indica que los comerciantes rurales están más preocupados por el incremento de los precios durante las medidas de contención que los comerciantes de áreas urbanas (REACH 30/06/2020, análisis adicional). Esto puede estar relacionado con la mayor dependencia que tienen los comerciantes rurales de las líneas de suministros intermunicipales. Sin embargo, el análisis adicional de los resultados de la encuesta de REACH también indica que los comerciantes urbanos denuncian más la falta de comida y de productos no alimentarios que los comerciantes rurales, posiblemente por la menor cantidad de opciones para adquirir productos locales. (REACH 30/06/2020, análisis adicional).

Los datos oficiales indican que han disminuido los precios de varios productos básicos desde un pico inicial en los primeros meses de la crisis por COVID-19; aunque los precios de algunos productos, como la carne, incrementaron en julio (DANE 07/2020). La renovación o extensión de medidas de cuarentena como las restricciones de movilidad posiblemente impulsen el aumento de precios en los próximos meses.

El cierre de las escuelas a causa de la COVID-19 han afectado el acceso a los alimentos. Según el Programa Mundial de Alimentos, el cierre de las escuelas ha provocado que más de 4 millones de niños no accedan a las comidas escolares en Colombia (PMA 07/2020).

Los datos recogidos desde el comienzo de las medidas de contención impuestas por el gobierno indican el impacto de la crisis por la COVID-19 en la seguridad alimentaria de

los migrantes y refugiados venezolanos. En mayo 2020, un estudio realizado en los hogares de refugiados y migrantes venezolanos indicó que el 26 % de los hogares consumían tres o más comidas por día, mientras que el 69 % podía consumir tres comidas por día antes de la crisis. Al mismo tiempo, el 15 % de los hogares informó haber consumido sólo una comida por día, y el 2 % informó haber consumido una comida por día previo a la crisis (GIFMM 17/07/2020). Además, la encuesta panel entre migrantes y refugiados venezolanos indicó una reducción en la variedad de ingestión de alimentos entre principios de abril y mayo(GIFMM 17/07/2020).

Los grupos de población más vulnerables de experimentar un aumento en la inseguridad alimentaria y malnutrición en los próximos meses son:

- Hogares pobres y de escasos ingresos, especialmente aquellos que dependen del trabajo informal y aquellos que perdieron el trabajo a causa de la crisis
- Los hogares de desplazados internos y los hogares de refugiados y migrantes venezolanos, quienes están más expuestos a utilizar mecanismos de defensa negativos como saltarse comidas y utilizar el sexo para sobrevivir.

Factores desencadenantes

- La prolongación de medidas de contención estrictas, incluidas las restricciones en actividades socio-económicas, posiblemente impacten en los trabajadores informales en particular
- El nivel de desempleo por encima del nivel anterior a la crisis
- La continua falta de acceso a los programas de protección social del gobierno y/o a la asistencia humanitaria de parte de ciertos grupos de población
- Interrupción continuada de la cadena alimentaria
- Inflación y aumento de precios en productos alimenticios
- El cierre prolongado de escuelas como parte de las medidas de contención de la COVID-19, si los niños no reciben paquetes de comida alternativos
- Reducción en asistencia gubernamental y humanitaria

- Las necesidades alimentarias y nutricionales posiblemente aumentarán en la población que depende del trabajo informal, incluyendo muchos refugiados y migrantes venezolanos.
- El número de personas que no tienen seguridad alimentaria se va a duplicar, alcanzando los 7 millones, de los cuales 2,4 millones sufrirán una verdadera inseguridad alimentaria (OCAH 07/2020). (En cierta medida, esto depende de la disponibilidad de la asistencia gubernamental y humanitaria, y de la extensión de las medidas de contención en los próximos meses, mientras el trabajo informal siga siendo limitado.)
- Aumento de malnutrición en los grupos poblacionales más vulnerables a causa de la falta de acceso a una alimentación variada. Particularmente en las comunidades indígenas Wayuu del departamento de La Guajira aumenta el riesgo de malnutrición, ya que la incidencia de malnutrición era alta previo a la crisis, con acceso limitado al agua, saneamiento e higiene, alimentos y atención sanitaria (HRW 13/08/2020)
- Más de 4 millones de niños continúan sin recibir la comida escolar. El 46 % son niñas (PMA 07/2020). Los niños que previamente contaban con las comidas escolares diarias para una diversidad alimentaria e ingestión de alimentos, requieren otro acceso a la asistencia alimentaria normal.

Las autoridades venezolanas frenaron los retornos regulares a Venezuela, dejando varados en Colombia a venezolanos con intención de volver, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas



Razonamiento

Nuevas restricciones en los pasos fronterizos, o el freno total para los retornos, ponen en un inmenso riesgo a las capacidades de los departamentos fronterizos para ayudar a aquellos que esperan volver. Los miles de venezolanos con intenciones de volver posiblemente se concentrarán en la frontera y las principales ciudades de la ruta de retorno y necesitarán asistencia humanitaria como alimento, agua, saneamiento e higiene, salud y refugio.

El confinamiento a nivel nacional y su impacto en las actividades de subsistencia ha tenido como resultado la pérdida de fuentes de ingreso y alojamiento en muchos refugiados y migrantes venezolanos en toda Sudamérica. Esto ha provocado movimientos de retorno a Venezuela, la mayoría de repatriados volviendo de Colombia, y algunos de Ecuador, Perú y Chile.

Entre mediados de marzo y principios de agosto, más de 95,000 refugiados y migrantes venezolanos retornaron a Venezuela por la frontera terrestre con Colombia (Gobierno de Colombia 06/08/2020). La principal ruta de retorno a Venezuela desde Ecuador y Perú es a través de Colombia. Los principales puntos fronterizos utilizados por los venezolanos para retornar son el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta, departamento Norte de Santander, y Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca, departamento Arauca. El paso fronterizo en Paraguachón, departamento La Guajira, es menos frecuentado por los repatriados.

Aunque la frontera Colombia-Venezuela esta oficialmente cerrada para prevenir la propagación del coronavirus, los repatriados pueden cruzar en puntos específicos de los pasos fronterizos. Al principio, la autoridades venezolanas redujeron gradualmente el número de repatriados autorizados a cruzar cada semana. A principios de junio, 300 personas fueron autorizadas a cruzar durante tres días por semana, y 100 en Arauca (Gobierno de Colombia 06/06/2020). Esto llevó a una aglomeración de personas en el lado

fronterizo de Colombia. El 14 de junio, el gobierno de Norte de Santander y agencias humanitarias abrieron un centro de acogida cerca de la frontera, con recursos para proveer asistencia básica hasta para 600 refugiados y migrantes venezolanos por el máximo de dos días mientras esperan la autorización para cruzar la frontera (Gobierno de Norte de Santander 30/06/2020, 15/06/2020; La Opinión 16/06/2020). Desde el 21 de agosto, el Puente Internacional Simón Bolívar en Cúcuta se encuentra cerrado para los repatriados (Gobierno de Colombia 20/08/2020). Desde mediados de agosto, al menos 2,000 refugiados y migrantes venezolanos se encuentran en la frontera en Cúcuta, mientras esperan la autorización para retornar a Venezuela (VoA 21/08/2020).

Condiciones en Venezuela

La capacidad para recibir repatriados en la frontera Venezolana es muy limitada. Los refugiados y migrantes repatriados deben hacer cuarentena una vez que arriban a Venezuela, pero el acceso a la asistencia humanitaria es limitada, así como también es limitado el acceso a un alojamiento temporario digno y a comida (Efecto Cocuyo 26/06/2020; UN OCAH 10/04/2020; TNH 12/05/2020). Mientras aumenta el número de repatriados, los centros de acogida se verán desbordados. Además, los repatriados han sido estigmatizados por el gobierno, acusándolos de ingresar la COVID-19 al país, lo que implica una preocupación por la seguridad especialmente de los repatriados con infectados de la COVID-19 (NYT 19/08/2020;Efecto Cocuyo 26/05/2020).

Venezuela está afectada por una crisis humanitaria, exacerbada por el brote de la COVID-19 que está presionando la capacidad de respuesta del gobierno y del sistema de salud desbordado del país. Si el brote de la COVID-19 empeora en Venezuela, la asistencia gubernamental y humanitaria posiblemente se desviará, lo que llevará a poner un freno a los retornos.

Panorama de la situación en Ecuador, Perú, y Chile

Ecuador, Perú y Chile hospedan un importante número de refugiados y migrantes venezolanos. Los tres países han sido severamente afectados por los brotes de COVID-19. Desde el 7 de septiembre de 2020, Perú registró 690,000 casos, Chile 422,000 casos (JHU 07/09/2020), y en Ecuador, 109,000 casos han sido registrados hasta el momento(JHU 07/09/2020). La crisis ha golpeado con especial dureza a la economía de estos tres países. Durante el 2020 se estima una reducción de PBI del 12 % (Perú), 4,3 % (Chile), y 7,4 % (Ecuador) (Banco Mundial 06/2020).

Aunque la frontera entre Ecuador y Colombia está cerrada oficialmente, los refugiados y migrantes venezolanos han estado usando pasos fronterizos informales para entrar a Colombia y seguir su camino en ruta a Venezuela(GTRM 08/07/2020). Algunas fuentes

estiman que cada día cruzan entre 30 y 50 personas, llegando desde Ecuador, Perú y Chile (GTRM 03/07/2020). No hay ninguna cifra confirmada.

Las restricciones relacionadas a la COVID-19 han llevado a la pérdida de trabajo en el sector formal e informal, impactando duramente a los refugiados y migrantes venezolanos de la región(OAS/Coalición por Venezuela 07/2020). Es probable que esto no cambie en los próximos meses. En abril 2020 se realizó una evaluación rápida de necesidades en Ecuador y se informó que el 65 % de los venezolanos entrevistados declararon que no podían trabajar por las medidas del gobierno, y un 5 % adicional habían sido despedidos(R4V 25/05/2020).

Datos sobre intenciones de retorno

Los resultados de la evaluación sobre las intenciones de retorno, indican que es probable que la mayoría de los refugiados y migrantes permanezcan en sus países de acogida. No obstante, es probable que miles de venezolanos intenten regresar colocando presión a los departamentos fronterizos colombianos.

En una encuesta ⁵ a los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia realizada en mayo de 2020, el 16 % de los encuestados declaró que al menos un miembro de la familia pretendía regresar a Venezuela el mes siguiente, siendo las razones principales la pérdida de ingresos y el deseo de reunirse con la familia en Venezuela. (GIFMM 17/07/2020).

En otra encuesta no representativa de 705 venezolanos refugiados y migrantes entrevistados en Colombia en abril y julio, el 14 % informó tener la intención de regresar a Venezuela. (MMC 07/2020). El análisis de datos encontró que los refugiados y migrantes venezolanos que han estado recibiendo asistencia desde el inicio de la crisis de la COVID-19, tienen menos probabilidades de regresar, lo que indica que la provisión de la asistencia humanitaria pueda actuar como un impedimento para los retornos a Venezuela.

Factores desencadenantes

- Continuación de medidas de contención en Colombia, Ecuador, Perú y Chile que impactan sobre el empleo y el trabajo informal, acompañado de insuficiente asistencia humanitaria para los refugiados y migrantes venezolanos en esos países, impulsando a más de ellos a regresar a Venezuela.
- Las capacidades de acogida en los estados fronterizos venezolanos se vuelven abrumadoras, impulsando a las autoridades venezolanas a restringir aún más el número de retornados permitidos.
- Empeoramiento del brote de la COVID- 19 dentro de Venezuela desviando recursos gubernamentales y humanitarios.
- El gobierno venezolano culpa cada vez más a los retornados por el aumento de casos de la COVID-19, dando una justificación para cerrar rutas humanitarias (DW 05/08/2020).

- No es probable que, todos los refugiados y migrantes venezolanos con una intención de regresar comiencen el viaje de regreso a Venezuela. Según un cálculo aproximado, es probable que el 7,5 % de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia regresen a Venezuela durante los próximos meses (la mitad de los venezolanos con intención de regresar, basado en los resultados de las encuestas de GIFMM y MMC). Esto equivaldría a unos 130,000 repatriados, excluyendo a los retornados de otros países que pasan a través de Colombia. Según el gobierno colombiano, desde principios de agosto unos 42,000 venezolanos han solicitado regresar.
- Es probable que miles de refugiados y migrantes venezolanos con la intención de regresar, se reúnan en Cúcuta y Arauca, y en las ciudades claves a lo largo de sus rutas a la espera del permiso para cruzar la frontera. Necesitarán un alojamiento que cumpla con los protocolos de distanciamiento social, agua y comida, acceso a artículos de sanidad e higiene y productos no alimenticios. Mujeres, niños y personas LGTBI afrontan riesgos de protección en particular. A medida que llegan a Colombia más migrantes y refugiados venezolanos que regresan de Ecuador, Perú y Chile, es probable que se reúnan en la frontera entre Ecuador y Colombia, y en las principales ciudades a lo largo de la ruta hacia la frontera venezolana incluyendo Pasto (Nariño), Cali (Valle del Cauca) y Bucaramanga (Santander).

⁵ Aunque la porción de venezolanos registrados en las bases de datos utilizadas para la encuesta por muestreo es representativa, los resultados no pueden considerarse representativos para el número total de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Otras limitaciones de la encuesta incluyen la recopilación de datos por teléfono.

- Los retornados tienen necesidades humanitarias significativas, ya que probablemente viajen solo con sus pertenencias básicas. El cierre de la actividad económica en Colombia (confinamiento) significa que su acceso a comida, agua y refugio es limitado.
- Riesgo de aumento de la transmisión del coronavirus debido al movimiento de la población y de la congregación de un gran número de personas en la frontera.
- Es probable que, la alta visibilidad de los retornos en los medios de comunicación alimente la xenofobia en Colombia, particularmente en zonas en donde los retornados se concentran.
- El cierre de dos principales puntos fronterizos en Cúcuta y Arauca probablemente conduciría a un desplazamiento gradual a otros puntos fronterizos oficiales, (como Paraguachón en la Guajira), los cuales también podrían estar cerrados.
- Es probable que aumenten los cruces fronterizos irregulares, utilizando las llamadas trochas, los cuales conllevan a una serie de riesgos. Como las trochas están controladas por grupos armados, los retornados están expuestos a riesgos en materia de protección incluyendo abusos y explotación. Además, las personas que cruzan de manera irregular la frontera, no pasan por controles de salud ni cumplen necesariamente con los 14 días de cuarentena al llegar a Venezuela, lo que implica la posibilidad de transmisión incontrolada de la COVID-19. El gobierno venezolano ha instaurado penas de cárcel para aquellos que son sorprendidos cruzando irregularmente hacia Venezuela (InSight Crime 24/07/2020).
- Los migrantes y refugiados venezolanos que atraviesan Colombia a pie, los llamados caminantes, enfrentan unas series de riesgos en materia de protección, y en el contexto de las restricciones del COVID-19 tienen menos acceso a la asistencia y a los servicios básicos (FLM 17/07/2020). Varios centros de acogida han sido cerrados debido a las restricciones por la COVID-19 impidiendo además el acceso a refugios seguros para los caminantes.

La economía colombiana se abre nuevamente y las condiciones en Venezuela empeoran ocasionando un aumento de llegadas de migrantes y refugiados venezolanos en necesidad de asistencia humanitaria



Razonamiento

Si bien es probable que los movimientos de regreso de Colombia a Venezuela continúen durante los próximos meses, es probable que un progreso de la situación en Colombia, particularmente una mejora económica y/o un deterioro de la situación en Venezuela, provoquen movimientos inversos.

La frontera entre Colombia y Venezuela ha estado oficialmente cerrada desde el 14 de marzo, salvo pocas excepciones para que las personas crucen de Venezuela a Colombia. A partir de agosto de 2020, las tendencias migratorias van en dirección opuesta con más venezolanos saliendo de Colombia que entrando. La cifra total de refugiados y migrantes presentada en Colombia ha disminuido ligeramente de 1,82 millones a 1,76 millones desde el inicio de la crisis de la COVID-19 (Gobierno de Colombia 06/08/2020).

Es probable que esta tendencia cambie en los próximos meses. Los refugiados y migrantes venezolanos que regresaron a Venezuela durante los últimos meses lo han hecho en gran medida como resultado de la pérdida de oportunidades de ingresos, y de medios para sostener sus hogares, debido al confinamiento nacional, y algunos como resultado de ser desalojados de sus viviendas en Colombia.

Sin embargo, las condiciones socioeconómicas y humanitarias en Venezuela siguen siendo graves. Según los cálculos del Programa Mundial de Alimentos en 2019, 2,3 millones de personas en Venezuela padecían inseguridad alimentaria grave y 7 millones padecían inseguridad alimentaria moderada (PMA 23/02/2020). Los suministros de servicios básicos, tales como: agua, electricidad y combustible se interrumpen habitualmente. Venezuela también se ve afectada por un brote de la COVID-19, con estrictas restricciones a las actividades económicas y movilidad, y un sistema de salud frágil que se está viendo abrumado por la epidemia. Es poco probable que hayan cambiado las razones que llevaron a muchos venezolanos a abandonar su país: Las

condiciones de vida, la falta de acceso a la comida y de medios de subsistencia, la falta de servicios básicos, y es probable que el brote de la COVID- 19 haya empeorado la situación.

Por lo tanto, es probable que muchos migrantes y refugiados venezolanos que regresaron a su país debido a la crisis de la COVID-19, enfrenten dificultades significativas y eventualmente decidan abandonar Venezuela nuevamente. El gobierno colombiano estima que el 80 % de los que abandonaron Colombia desde el comienzo de la pandemia regresarán durante los próximos meses, trayendo consigo a una persona más (El Tiempo 01/07/2020, 06/07/2020). Es probable que un empeoramiento de la situación en Venezuela, desencadene una mayor migración de Venezuela a Colombia.

Factores desencadenantes

- Reapertura de la economía colombiana y aumento de las oportunidades laborales informales, relajación de las restricciones relacionadas con la COVID-19
- Reapertura de la frontera colombo-venezolana
- Confinamiento continuo (Cuarentena nacional) en Venezuela con restricciones a las actividades socioeconómicas
- El empeoramiento del brote de la COVID-19 conduce a un aumento de necesidades insatisfechas de salud
- Empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela: aumento de la inseguridad alimentaria, falta de acceso a los servicios básicos
- Nuevas sanciones estadounidenses a las importaciones de diesel llevando a una mayor escasez de combustible en Venezuela
- Mayor inestabilidad política en Venezuela en relación a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020

Impacto

- Aumento en llegadas de venezolanos a los principales cruces fronterizos. Hasta ahora, alrededor de 100,000 han regresado a Venezuela: según los cálculos del gobierno del 80 % de ellos regresan y traen consigo a un miembro de la familia. Es probable que unos 144,000 regresen a Colombia (ya sea para quedarse o para transitar a otros países). Es probable que haya más migración de venezolanos que no habían abandonado el país anteriormente.
- La llegada de migrantes y refugiados venezolanos, probablemente ejercerá presión sobre los departamentos fronterizos en términos de capacidad de recepción, la capacidad del mercado laboral local para absorber venezolanos y asistencia humanitaria.
- Si la frontera permanece oficialmente cerrada, es probable que muchos utilicen cruces fronterizos irregulares a través de rutas terrestres ("Trochas") y ríos, exponiendolos a riesgos de protección, tales como: explotación y violencia, ya que estos cruces están controlados por grupos armados. Los refugiados y migrantes venezolanos que llegan a Colombia de esta manera no son inmediatamente registrados con las autoridades colombianas y por lo tanto, carecen de acceso a un estado legal dentro de Colombia el cual tiene implicaciones sobre su acceso a la protección legal, seguridad social y servicios de salud. Tampoco pasarán por un chequeo médico en la frontera.
- "Los caminantes", que van a pie a través de Colombia para llegar a su destino, son propensos a enfrentar riesgos de protección y seguridad, especialmente si no conocen la ruta y el terreno, y necesitarán refugio, comida, aseo y servicios básicos. En el contexto de las restricciones establecidas por la COVID-19 muchos albergues han cerrado, lo que hace aún más difícil para los caminantes tener acceso a un refugio seguro.
- Los venezolanos en proceso de regularización de su estatus migratorio en Colombia que salgan para ir de vuelta a Venezuela corren el riesgo de perder el progreso de su proceso de regularización o incluso de que les sea negado si regresan a Colombia.
- Tomando en cuenta la ola migratoria y de refugiados previa a la COVID-19, los recién llegados son altamente vulnerables y necesitan asistencia humanitaria (Washington Post 08/08/2019).

Factores agravantes

Los factores agravantes son problemas o eventos que pueden incrementar los riesgos analizados en este reporte y que lleven más adelante a la intensificación de las necesidades humanitarias.

COVID-19

La COVID-19 ha impactado con severidad a Colombia con un brote que es probable que continúe, poniendo una carga muy pesada en el sistema de salud y la economía del país para los meses futuros. Es posible que este brote desvíe la atención y los recursos de otras crisis y que reduzca la capacidad del gobierno y otras organizaciones de responder a las necesidades humanitarias.

Colombia ha incrementado la capacidad hospitalaria y de realizar test, sin embargo antes de la crisis el número de camas y unidades de cuidados intensivos (UCI) eran bajas en comparación con otros países. La capacidad de los hospitales es limitada, sobre todo en áreas remotas. Una preocupación adicional es la infección de personal médico, lo que reduce aún más la capacidad del sistema de salud.

Las personas en áreas de escasos recursos, por ejemplo áreas de bajos recursos de Bogotá, no han cumplido con las restricciones de movilidad ya que tienen muy pocos bienes familiares, han perdido su ingreso y deben generar una entrada de dinero. A medida que se extienden las normas de confinamiento la pobreza aumenta y es probable que aumenten los focos de grupos que incumplen la cuarentena (probablemente en áreas urbanas pobres). El riesgo de transmisión en estas áreas es alto.

El acceso de algunos grupos poblacionales a la asistencia médica es limitado, lo que aumenta su vulnerabilidad a la COVID-19. Muchos venezolanos no están registrados en la seguridad social y solo tienen acceso a los servicios de emergencia médica. (OAS/Coalición por Venezuela 07/2020). No es probable que se acerquen a los servicios médicos, incluso cuando presentan síntomas, por temor a las repercusiones.

Acceso humanitario

El acceso humanitario en Colombia está obstaculizado por el terreno difícil, el conflicto armado y las restricciones de movilidad debido a la COVID-19. En este contexto, las amenazas y ataques contra el ingreso de organizaciones humanitarias y misiones médicas plantean un reto adicional, debido a que los grupos armados utilizan la crisis para ejercer control territorial y social (OCHA 12/08/2020).

El acceso de la población afectada a la ayuda a veces es entorpecido por situaciones de confinamiento, lo cual se agrava por las restricciones de movilidad por la COVID-19.

Los refugiados y migrantes venezolanos sin estatus legal regular enfrentan obstáculos para acceder a los servicios básicos.

Debido a la COVID-19, el acceso a las comunidades para llevar a cabo ejercicios de recolección de datos es limitado y la mayoría de las entrevistas se deben realizar vía telefónica. Esto plantea desafíos y limitaciones para la representatividad de la data recogida.

Brote de COVID-19 en países vecinos

La capacidad del sector salud en Venezuela es extremadamente baja, la crisis está politizada, y hay muy poca comunicación oficial y coordinación entre Venezuela y Colombia. Si ocurre un gran brote en Venezuela probablemente Colombia se vería afectada, puesto que los venezolanos cruzarían la frontera para obtener asistencia médica en Colombia. Los pasos fronterizos irregulares particularmente incrementan el riesgo de transmisión dentro de Colombia ya que no hay chequeos de salud.

Para el 7 de septiembre de 2020 Venezuela registraba unos 53,200 casos confirmados de COVID-19 (OCHA). Este número es seguramente más bajo que la cantidad de casos actuales, esto debido a la baja capacidad para realizar test de Venezuela. Las casos nuevos diarios han incrementado de aproximadamente 600 a finales de julio a más de 1,000 a mitad de agosto.

Otro factor de riesgo es la frontera con Brasil. El departamento de Amazonas ha visto un brote significativo. Ya que la frontera es una jungla, con flujo de gente moviéndose a través de los ríos, es muy difícil de patrullar y controlar.

Protestas sociales

Las protestas sociales tienen el potencial para desviar la atención de las respuestas para la COVID-19 y otras crisis, interrumpir cadenas de suministros, reducir el acceso humanitario, y potencialmente llevar al incremento de casos de COVID-19.

Las medidas de confinamiento ya se han ido extendiendo repetidamente en varias partes del país y se han suavizado en aquellas municipalidades donde no se han registrado casos de COVID-19. Si el número de casos sigue aumentando es posible que se extienda el confinamiento y luego se vaya suavizando gradualmente. Considerando el impacto económico, las protestas contra las medidas gubernamentales son más probables a medida que se amplían las medidas. El descontento con estas medidas gubernamentales ya han causado algunas pequeñas protestas localizadas.

En otro orden de ideas, en noviembre de 2019, las protestas a gran escala atrajeron a cientos de miles de personas a las calles de las grandes ciudades para protestar en contra del gobierno y pedir, entre otros, más apoyo a la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. La frustración ante la respuesta del gobierno con respecto al

conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz, así como también la indignación por el reciente aumento de las masacres pueden desencadenar protestas a gran escala, sobretodo en áreas urbanas.

Xenofobia

La xenofobia contra refugiados y migrantes venezolanos ha estado aumentando. En el marco de la crisis de la COVID-19 es probable que se vea impulsada por la pobreza y el desempleo, la percepción de que los venezolanos reciben atención preferencial o la percepción de que están propagando el virus.

Datos de una encuesta de opinión muestran que el rechazo hacia los venezolanos ha aumentado en la población colombiana desde el inicio de la crisis por COVID-19. En una encuesta de Gallup de abril 2020, el 87 % de los encuestados indicó que les gustaría que la frontera entre Colombia y Venezuela permaneciera cerrada después de que finalicen las medidas de confinamiento, para prevenir que más venezolanos entren. El porcentaje de los encuestados que indican que tenían una opinión desfavorable de los venezolanos que vinieron a Colombia para quedarse incrementó de un 67 % en febrero a 81 % en abril. (Gallup 04/2020). De acuerdo con una evaluación del GIFMM en mayo, el 46 % de los venezolanos migrantes y refugiados entrevistados reportaron haber experimentado discriminación durante el 2020. La encuesta también mostró que las experiencias de discriminación disminuyeron desde el inicio de la crisis por la COVID-19 (GIFMM 27/07/2020). Por el contrario, en abril, el 22 % de los consultados en una encuesta no representativa de venezolanos refugiados y migrantes en Colombia y Perú indicaron que habían experimentado más xenofobia y racismo debido a la COVID-19 (MMC 04/2020).

Temporada de lluvias y desastres naturales

Colombia es propensa a desastres naturales incluyendo terremotos, con varios volcanes activos en diferentes lugares. Las temporadas de lluvias provocan inundaciones en diferentes partes del país, usualmente con un impacto humanitario considerable que incluye daños a cultivos, hogares e infraestructura esencial (OCHA 03/2020)

COLOMBIA

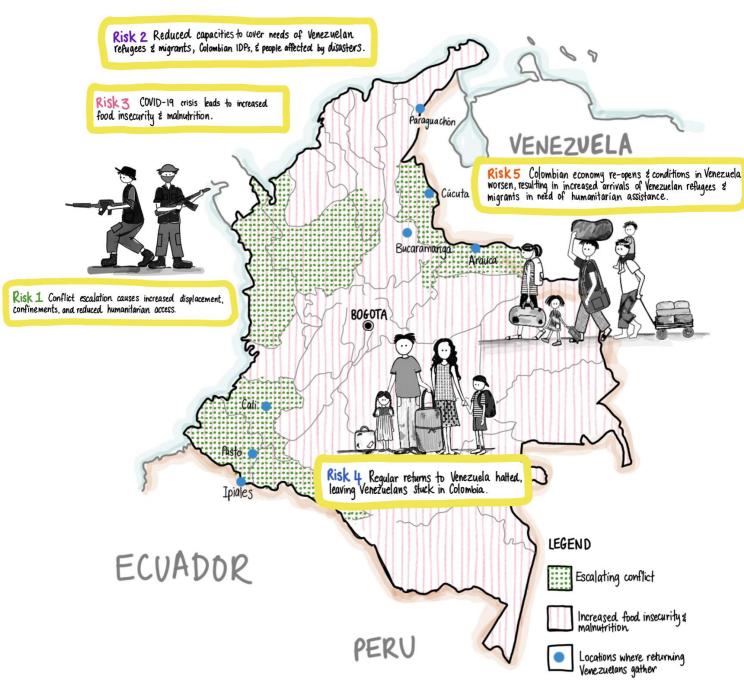


Ilustración por Sandie Walton-Ellery